



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, siete de marzo de dos mil veintitrés

21-218

Proceso:

CONSULTA

Demandante:

MARIA ALICIA ARIAS SUÁREZ

Demandado:

COLPENSIONES

Radicado No.:

05088-31-05-001-2018-00724-01

Decisión:

CONFIRMA ABSOLUCIÓN

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a conocer en el grado jurisdiccional de consulta la sentencia de única instancia dentro del proceso de la referencia.

Se reconoce personería al doctor **SANTIAGO GOMEZ GAVIRIA** identificado con C.C. No. 1.037.617.332 y portador de la T.P. No. 342.104 del C.S de la J., para representar a COLPENSIONES según sustitución de poder del apoderado **RICHARD GIOVANNY SUAREZ TORRES**, con c.c. 79.576.294 y TP. 103.505 del C.S. de la J. representante legal de la firma **RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S.**, inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá según consta en el Certificado de Existencia Representación Legal en su calidad de apoderado judicial de COLPENSIONES, de acuerdo con la escritura pública N° 3377 de 2 de septiembre de 2019 de la Notaría 9 del Círculo de Bogotá.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto aprobado en sala virtual en el **ACTA 007** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1.LO PRETENDIDO

Pretende el demandante que se condene a **COLPENSIONES** al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales del 14% por tener a cargo a su cónyuge, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que mediante Resolución GNR 010015 del 1º 20110117 el Seguro Social le reconoció la pensión de vejez, en aplicación del Decreto 758 de 1990 por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sin embargo no se le concedió el incremento del 14% por tener a cargo a su cónyuge.
- Que convive con su cónyuge LEONARDO TASCON MONSALVE, desde hace más de 15 años, quien depende económicamente de él, ya que no labora ni posee ingresos de ningún tipo.
- Que en febrero de 2017 solicitó a la demandada los incrementos por cónyuge a cargo.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió la entidad demandada el derecho pretendido; frente a los hechos indicó que aceptaba como cierto el contenido de la resolución que le reconoció la pensión de vejez a la actora, que esta contrajo matrimonio con el señor LEONARDO TASCON y la reclamación administrativa. En cuanto a los restantes hechos indicó que no le constan o que se trata de apreciaciones de la parte actora, por lo que deberán ser objeto de debate probatorio.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 5 de agosto de 2021 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello se **ABSOLVIÓ** a **COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora **MARIA ALICIA ARIAS SUÁREZ**, a quien condenó en costas en la suma de \$100.000.

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DE LA JUEZ

Estimó que si bien anteriormente la jurisdicción ordinaria consideraba que los incrementos pensionales por persona a cargo contemplados en los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990 no fueron derogados por la Ley 100 de 1993 y se integraban al régimen de prima media con prestación definida, a partir de la sentencia SU-140 de 2019 la Corte Constitucional determinó que el régimen de transición solo conservó aspectos atinentes a la pensión de vejez y no los accesorios como lo son los

incrementos pensionales, por tanto estos, habían sido derogados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y solo podían aplicarse a aquellos pensionados que causaron el derecho a la pensión de vejez en vigencia del Decreto 758 de 1990, es decir, con anterioridad al 1º de abril de 1994.

Por consiguiente, concluyó el a quo que en acatamiento del precedente jurisprudencial, como la demandante se pensionó en vigencia de la Ley 100 de 1993 no le son aplicables los referidos incrementos pensionales, por lo que absolvió a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra.

2.2. CONSULTA

La presente decisión fue enviada para ser conocida en el grado jurisdiccional de CONSULTA por haber sido adversa a los intereses del demandante, conforme a la sentencia C-424 de 2015 que declaró condicionalmente exequible el artículo 69 del C.P.T. y la S.S., *“entendiéndose que también serán consultadas ante el correspondiente superior funcional, las sentencias de única instancia cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario”*

2.2.3. ALEGATOS DE COLPENSIONES

Solicita que se confirme la sentencia absolutoria de primera instancia, toda vez que no es procedente acceder al reconocimiento de los incrementos pensionales consagrados en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, dado que según dispone el 22 de dicha normatividad los incrementos no hacen parte integrante de la pensión, además la Ley 100 de 1993, nada dispuso respecto a la concesión de tales incrementos y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que contempla el régimen de transición, únicamente mantuvo las condiciones de edad, tiempo y monto contenidas en la legislación anterior y no se refirió a prestaciones distintas como los incrementos pensionales que en este caso se pretenden.

Agregó que la Corte Constitucional en providencia de unificación SU 140 del año 2019, precisó que estos incrementos en efecto fueron derogados por la ley 100 de 1993, a partir de su entrada en vigencia el 1 de abril de 1994. En esa medida ha de entenderse que tal derogatoria aplica incluso para los beneficiarios del régimen de transición, siendo posible su reconocimiento solo y exclusivamente cuando el reconocimiento pensional se circunscribe a las disposiciones del Decreto 758 de 1990, pues en los demás casos en que se dé el reconocimiento de pensión bajo los preceptos normativos posteriores a la ley 100 de 1993, habrá de entenderse que el beneficio de los incrementos quedó derogado y por tanto no aplica su reconocimiento por ninguna vía, en los términos de la Providencia de unificación SU 140 a la que se ha hecho referencia. En conclusión, sólo serían procedentes, cuando el

pensionado acredite haber sido pensionado directamente en aplicación al decreto 758 de 1990 y no a las personas que se les aplique el régimen de transición, no siendo el caso del demandante.

Finalmente solicita que se tenga en cuenta la excepción de prescripción propuesta por la Entidad, en la medida en que la prescripción es aquel término que extingue los derechos y prescribe las acciones por el transcurso del mismo, tal como lo establece los artículos 488 del Código Sustantivo de Trabajo, y 151 del Código Procesal de Trabajo, en el caso que el despacho resolviera acceder a las pretensiones del demandante, ruego sea tenida en cuenta la prescripción de todas las acciones y derechos que hubieren sufrido este fenómeno en razón del paso del tiempo.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Se centra en determinar si es procedente reconocer al demandante los incrementos pensionales por cónyuge a cargo y dependiendo de ello se analizará si hay lugar a la indexación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Respecto a los incrementos pensionales por persona a cargo, debe indicarse que tal prestación fue regulada en los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990, normatividad que regía para los afiliados del Instituto de Seguros Sociales antes de la creación del sistema general de pensiones, donde se estableció que la persona que accediera a la pensión de vejez o invalidez, tendría derecho a la que la prestación se incrementara en ciertos porcentajes dependiendo de las personas que tuviera a su cargo, dígase cónyuge o compañero o compañera permanente, hijos o hijas menores de 16 años o de 18 años si eran estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependieran económicamente del pensionado.

Tras la expedición de la Ley 100 de 1993, que introdujo diferentes requisitos para acceder a la pensión de vejez, esta Magistratura compartió el criterio imperante de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según el cual, al que al no disponer dicha ley nada respecto de los incrementos pensionales, los mismos no pugnaban con la nueva legislación, beneficio que se mantenía en vigor para el afiliado al que se le aplicara el Decreto 758 de 1990 por derecho propio o por transición.

Así mismo, la Corte Constitucional, en un principio, implícitamente avaló la tesis de la vigencia de los referidos incrementos tras la expedición de la Ley 100 de 1993, al sostener que no prescribía el derecho a accionar para reclamar los mismos como se indicó en sentencias T-217 de 2013, T-831 de

2014, T-319 de 2015, T-395 de 2016 y en la sentencia SU-310 de 2017, sin embargo dicha sentencia fue declarada nula por Auto 320 de 2018 proferido por la misma Corporación.

Por lo que el 28 de marzo de 2019, la Corte Constitucional profirió la sentencia de Unificación SU -140 donde consideró que los incrementos pensionales que regulaba el art. 21 del Decreto 758 de 1990 fueron objeto de derogatoria orgánica a partir de la entrada en vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993 y por ello quienes adquirieron el derecho a la pensión en vigencia de esta Ley, aún en aplicación del Decreto 758 de 1990 en virtud de la transición regulada en su artículo 36, **NO** tenían derecho a acceder al incremento pensional.

En tal providencia, tras analizar, entre otros temas, el alcance del principio de sostenibilidad financiera en la reforma constitucional realizada a través del Acto Legislativo 01 de 2005 y las razones del legislador para modificar el sistema pensional a través de la Ley 797 de 2003, la Corte concluyó que los beneficios del art 21 del Decreto 758 de 1990, fueron derogados a partir del 1º de abril de 1994 y solo tienen vocación de prosperidad para aquellos pensionados que causaron ese derecho antes de la data en mención. A juicio de la Corte Constitucional, tal interpretación no pugna con los principios de favorabilidad e *indubio pro operario*, pues como puso de presente en la misma decisión, era claro que en realidad, la duda hermenéutica que surgía o bien no existía o al menos era lo suficientemente débil como para NO dar lugar a la aplicación de los principios en mención, toda vez que el referido art. 21 había dejado de existir con ocasión de la derogatoria tácita que implicó la expedición de la Ley 100 de 1993, a través de la cual el legislador previó una nueva regulación integral de la generalidad del sistema de seguridad social.

En consecuencia, en atención al criterio que acoge esta Magistratura, por ser un precedente de obligatorio acatamiento para las autoridades judiciales al tratarse de una sentencia de unificación, pues conforme al artículo 241 de la Constitución Política a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la Constitución, el mismo no puede desconocerse como lo pretende la parte actora en sus alegatos, por lo que se concluye que a la señora MARIA ALICIA ARIAS SUÁREZ no le asiste derecho a acceder al incremento pensional por cónyuge a cargo, toda vez que, según se analizó, no se le aplicó el Decreto 758 de 1990 por derecho propio, ya que su pensión de vejez se causó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, conforme se visualiza en Resolución No. 100115 del 2011 (fl 11 del expediente digital), debiéndose entonces CONFIRMAR la sentencia revisada en consulta que ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 5 de agosto de 2021 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA ALICIA ARIAS SUÁREZ** identificada con cedula de ciudadanía N° **21.395.214**, contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante:	MARIA ALICIA ARIAS SUÁREZ
Demandado:	COLPENSIONES
Radicado No.:	05088-31-05-001-2018-00724-01
Decisión:	CONFIRMA ABSOLUCIÓN
Fecha de la sentencia:	07/03/2023

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **08/03/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario